

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)*

Chile

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 March 2025

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 March 2025

*No UNTS volume number has yet been determined for this record.

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4*

Chili

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 mars 2025

Enregistrement au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 mars 2025

*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier.

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

Nota 21/2025

La Misión Permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas tiene el agrado de saludar atentamente al señor Secretario General y, de conformidad lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informa lo siguiente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, por decreto supremo N°66, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 25 de febrero de 2025, S.E. el Presidente de la República Gabriel Boric Font declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La medida anterior fue adoptada en respuesta a la falla del Sistema Eléctrico Nacional, que produjo una interrupción del suministro eléctrico desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos y provocando restricciones de tránsito, alteración y suspensión de otros servicios básicos, problemas de conectividad en rutas, entre otras situaciones, afectándose con ello a las personas y sus bienes. En ese sentido, se produjeron diversas afectaciones en distintas regiones del país, tales como interrupciones de centrales de bomberos, operaciones de servicios de emergencia con sistemas de respaldo, suspensión del servicio de metro y evacuación de sus líneas, suspensión de operaciones de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, falla de generadores en Servicios Nacionales de Salud, entre otras. Asimismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha informado que existe un total de afectados estimado de más de ocho millones de personas.

Dicho Estado de Excepción fue dispuesto por un término de tres días, esto es, hasta el día 28 de febrero de 2025.

De conformidad con la regulación constitucional vigente, el establecimiento del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe permite la restricción y suspensión de garantías previstas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, durante la vigencia del referido Estado de Excepción Constitucional, los derechos a la libertad de circulación y de reunión, previstos en los artículos 12 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son susceptibles de suspensión.

En ese sentido, en el periodo que se reporta, se dispuso una suspensión temporal al derecho a la libertad de circulación, previsto en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecerse toque de queda desde el día 25 de febrero de 2025 a las 22:00 horas, hasta el día 26 de febrero de 2025 a las 06:00 horas, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Cabe destacar que por expresa disposición constitucional (artículos 1, 5, 6, 7, 19 N° 26, 20, 21 y 45 de la Constitución Política de la República), las garantías que no sean expresamente suspendidas o restringidas en el referido Estado de Excepción siguen resguardadas. En efecto, su respeto y promoción sigue siendo deber de los órganos del Estado, y las actuaciones del Ejecutivo siguen sujetas a controles y contrapesos de los demás poderes del Estado, cuyo funcionamiento no resulta en modo alguno alterado por estas medidas.

A su vez, la Ley N° 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción permite al Presidente de la República delegar sus facultades —total o parcialmente—, a los Comandantes en Jefe de las Unidades de las Fuerzas Armadas. Por ello, el decreto que establece el referido Estado de Excepción Constitucional contiene también la designación del respectivo Jefe de Defensa Nacional, toda vez que es éste el autorizado para establecer las restricciones que permite la Constitución y la ley.

Finalmente, es importante destacar que el Estado de Chile tiene un compromiso irrestricto con la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como pilares fundamentales de la convivencia social. Las restricciones a la libertad de circulación que pueden ser establecidas en el marco del referido Estado de Excepción Constitucional se ajustan plenamente a las obligaciones internacionales de Chile, dado que se limitan al mínimo indispensable para proteger la vida e integridad física de las personas afectadas por la situación de emergencia. En consecuencia, las referidas restricciones serán levantadas tan pronto se supere esta situación.

Atendido lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Misión Permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas informa al señor Secretario General sobre la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las zonas indicadas, a fin de que se informe a los demás Estados Parte.

La Misión Permanente de Chile aprovecha esta oportunidad para expresarle al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 26 de febrero de 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'G. G.' followed by a long horizontal line and a vertical stroke.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note 21/2025

The Permanent Mission of Chile to the United Nations presents its compliments to the Secretary-General and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him of the following:

In accordance with article 41 of the Political Constitution of the Republic, H.E. the President of the Republic, Gabriel Boric Font, has declared a constitutional state of emergency in the Regions of Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos and Los Lagos, by Supreme Decree No. 66 of the Ministry of the Interior and Public Security, published on 25 February 2025.

That measure was adopted in response to the failure of the national electrical system, which resulted in the interruption of the electricity supply from the Arica y Parinacota Region to the Los Lagos Region, and caused traffic restrictions, the disruption and suspension of other basic services, connectivity problems on the roads, and other situations, thereby affecting people and their property. Different regions of the country were affected in various ways, including power cuts at fire department control centres, the use of backup systems in the operations of emergency services, the suspension of the subway service and the evacuation of the subway lines, the suspension of the operations of the State railway company, and the failure of generators in national health services. The Office of the Superintendent of Electricity and Fuels has stated that, in total, more than eight million people are estimated to be affected.

The state of emergency was established for a three-day period that will end on 28 February 2025.

In accordance with the constitutional regulations in force, the rights safeguarded in the Political Constitution of the Republic and in the international treaties ratified by Chile, including the International Covenant on Civil and Political Rights, may be restricted or suspended when constitutional states of emergency are established. Consequently, while the aforementioned constitutional state of emergency is in force, the right to liberty of movement and the right of assembly, as provided for in articles 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, may be suspended.

In that regard, during the period reported, the right to liberty of movement, as provided for in article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, was temporarily suspended owing to the establishment of a curfew from 25 February 2025 at 10 p.m. until 26 February 2025 at 6 a.m. in the Regions of Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos and Los Lagos.

By express provision of the Political Constitution of the Republic (articles 1, 5, 6, 7, 19 (26), 20, 21 and 45 thereof), rights that are not expressly suspended or restricted by the aforementioned state of emergency continue to be safeguarded. Respect for and the promotion of those rights remains the duty of State bodies, and the actions of the executive branch remain subject to the checks and balances of the other branches of government, whose functioning is in no way altered by those measures.

The Constitutional Organic Act (Act No. 18.415) concerning states of emergency allows the President of the Republic to delegate his powers – in full or in part – to the commanders-in-chief of the various units of the Armed Forces. For that reason, the Decree on the aforementioned constitutional state of emergency also provides for the designation of the respective defence chief, since it is he who is authorized to establish the restrictions permitted by the Constitution and the law.

Lastly, Chile is unreservedly committed to democracy, the rule of law and the defence of human rights, as key pillars of social coexistence. The restrictions on liberty of movement that may be established under the aforementioned constitutional state of emergency are fully in line with the international obligations of Chile, given that they are limited to what is strictly necessary to protect the life and physical integrity of persons affected by the emergency. Consequently, those restrictions will be lifted as soon as the situation is resolved.

Given the above, and in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Chile to the United Nations hereby informs the Secretary-General of the extension of the constitutional state of emergency in the areas indicated, in order for him to inform the other States Parties thereof.

The Permanent Mission of Chile takes this opportunity to convey to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.

New York, 26 February 2025

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note 21/2025

La Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer de ce qui suit :

En vertu des dispositions de l'article 41 de la Constitution politique de la République et par le décret suprême n° 66 du Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique publié le 25 février 2025, le Président de la République, Monsieur Gabriel Boric Font, a déclaré l'état d'exception constitutionnelle de catastrophe dans les provinces d'Arica y Parinacota, de Tarapacá, d'Antofagasta, d'Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, de Metropolitana de Santiago, du Libertador General Bernardo O'Higgins, de Maule, de Nuble, de Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos et de Los Lagos.

Cette mesure a été prise en réponse à la défaillance du système électrique national, qui a provoqué une interruption de l'approvisionnement en électricité de la province d'Arica y Parinacota à celle de Los Lagos, entraînant des restrictions de la circulation, la perturbation et la suspension d'autres services de base, des problèmes de connectivité sur les axes routiers, entre autres, ce qui a eu des répercussions sur les personnes et leurs biens. À cet égard, différentes régions du pays ont connu diverses répercussions : pannes dans les casernes de pompiers, opérations de services d'urgence au moyen de systèmes de secours, suspension du service de métro et évacuation des lignes, suspension des opérations de la société nationale des chemins de fer, défaillance des générateurs dans les services nationaux de santé, entre autres. En outre, la Surintendance de l'électricité et des combustibles a indiqué que plus de huit millions de personnes étaient touchées.

L'état d'exception a été déclaré pour une période de trois jours, soit jusqu'au 28 février 2025.

Selon les règles constitutionnelles en vigueur, l'instauration de l'état d'exception de catastrophe permet de restreindre et de suspendre des garanties prévues par la Constitution politique de la République et les traités internationaux ratifiés par notre pays, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par conséquent, tant que durera l'état d'urgence, les droits à la liberté de circulation et à la liberté de réunion, prévus aux articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pourront être suspendus.

À cet égard, au cours de la période considérée, le droit à la liberté de circulation, prévu à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été temporairement suspendu par l'instauration d'un couvre-feu du 25 février 2025 à 22 heures, jusqu'au 26 février 2025 à 6 heures du matin, dans les provinces d'Arica y Parinacota, de Tarapacá, d'Antofagasta, d'Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, de Metropolitana de Santiago, du Libertador General Bernardo O'Higgins, de Maule, de Nuble, de Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos et de Los Lagos.

En vertu de dispositions constitutionnelles expresses (articles 1, 5, 6, 7, 19 (26), 20, 21 et 45 de la Constitution politique de la République), les garanties qui ne sont pas explicitement suspendues ou restreintes dans le cadre de l'état d'urgence restent en vigueur. En effet, leur respect et leur promotion continuent de s'imposer aux organes de l'État et l'action de l'exécutif reste soumise au mécanisme de contrôle et d'équilibre des autres pouvoirs de l'État, dont le fonctionnement n'est en aucun cas remis en cause par ces mesures.

Par ailleurs, la loi organique constitutionnelle n° 18.415 relative aux états d'exception permet au Président de la République de déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, aux commandants en chef des unités des forces armées. Par conséquent, le décret établissant l'état d'urgence constitutionnel porte également désignation du militaire chargé de la défense nationale, celui-ci étant la personnes habilitée à appliquer les restrictions autorisées par la Constitution et par la loi.

Enfin, il est important de souligner que l'État chilien est pleinement attaché à la démocratie, à l'état de droit et à la défense des droits humains, en tant que piliers fondamentaux de la coexistence sociale. Les restrictions de la liberté de circulation qui peuvent être imposées dans le cadre de l'état d'exception constitutionnel en vigueur sont pleinement conformes aux obligations internationales du Chili en ce qu'elles se limitent aux seules mesures strictement nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des personnes touchées par la situation d'urgence. Elles seront donc levées dès que cette situation aura pris fin.

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies signale au Secrétaire général, afin que les autres États parties en soient informés, que l'état d'exception de catastrophe a été prorogé dans les régions indiquées.

La Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 26 février 2025